

13.2. GOBIERNOS PROGRESISTAS Y DESMOVILIZACIÓN ¿REVOLUCIONES PASIVAS EN AMÉRICA LATINA?

Massimo Modonesi¹

En aras de proponer claves de lectura que orienten un ejercicio de balance de la conflictualidad socio-política en América Latina en el año 2012, operaremos un recorte geopolítico, como condición indispensable para poder generalizar y, por ende, trazar algunas líneas de interpretación que consideramos pertinentes y útiles en tanto atraviesan uno de los debates fundamentales de la época. Centraremos en efecto la atención en el análisis de los procesos de movilización en los países donde gobiernan fuerzas progresistas (y en particular Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador) en la medida en que configuran una situación que reúne tres características que la delimitan: *especificidad* en tanto se distingue en función del contexto político y del tipo de gobiernos; *representatividad* en cuanto incluye a la mayoría de las naciones suramericanas; *atipicidad* en la medida en que se contrapone al típico escenario en donde los movimientos se confrontan a gobiernos conservadores o reaccionarios, que ha constituido la norma y, en buena medida, la referencia en la formación de paradigmas analíticos en el campo de las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales.

La hipótesis que sostendremos en las siguientes páginas desarrolla y profundiza la que formulamos el año pasado en torno a una transición epocal marcada por la tensión aparentemente contradictoria entre procesos de desmovilización y removilización (Anuari 2011).

En efecto, a nuestro parecer, en 2012 se acentuaron tendencias ya en curso en los años anteriores sin que podamos rastrear y destacar la emergencia de otros rasgos trascendentes, aun cuando, como argumentaremos, esta acentuación

¹ Profesor titular y Coordinador del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Director de la revista OSAL de CLACSO.

permite aventurar algunas hipótesis conceptualmente más elaboradas en aras de acercarnos a una caracterización más precisa del momento y del proceso político latinoamericano desde la pendiente de los países gobernados por fuerzas progresistas.

Ya que, por razones de espacio y para privilegiar el carácter interpretativo de este artículo, no podré ejemplificar y referirme puntualmente a experiencias y acontecimientos concretos, remito para este efecto a la consulta de las cronologías y los informes sobre la conflictualidad social publicados en la página del Observatorio Social de América Latina del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales (CLACSO), así como a los análisis surgidos de otros observatorios nacionales de los países que trato de agrupar en este ejercicio de reflexión. En particular, recomiendo la lectura de los informes anuales de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Brasil, escritos respectivamente por Marco Antonio Ponce-Armando Chaguaceda, Mario Unda, Pilar Uriona-Dunia Mokrani, María Celia Cotarelo y Roberto Leher, publicados en el número 33 de la revista OSAL de mayo de 2013 disponible en la página web de CLACSO.

En una lectura transversal de estos ejercicios de síntesis, observamos dos tendencias que aparecen en cada país aunque asuman una forma particular y específica, y se combinen y articulen de manera distinta: A) una persistencia e inclusive en algunos casos un aumento de la conflictividad social; B) una tendencia a la desmovilización de los movimientos que antecedieron los gobiernos progresistas y la despoltización de la protesta y la acción colectiva.

Podemos sostener que estas dos tendencias se presentan como constantes en la medida que atraviesan diversas realidades y, al mismo tiempo, como variables en tanto se presentan con desigual intensidad y bajo distinto aspecto en las configuraciones concretas, es decir, se observan variaciones relevantes en relación con el tipo de actores, alianzas, reivindicaciones, repertorios de acción, impacto y duración de los conflictos, etc.

La primera tendencia es observable por medio del registro cuantitativo y está siendo objeto de varios acercamientos en forma de cronologías de conflictos,

crónicas periodísticas, estudios de casos, análisis de coyuntura y balances de distinto alcance temporal. En este sentido, su relevamiento corresponde a y emerge de la mayoría de los estudios especializados que se realizan en ámbitos académicos o de organizaciones sociales o no gubernamentales. En este sentido, en todos los países latinoamericanos gobernados por fuerzas progresistas en el año 2012 se registraron una gran cantidad de conflictos sociales y de episodios de movilización y protesta que, sin ser en todos los casos cuantitativamente superiores a los de los años anteriores², muestran que se mantienen e inclusive tienden a aumentar, demostrando cierta vitalidad en las dinámicas socio-políticas conflictuales y la persistencia del recurso a la acción colectiva como instrumento de presión y de visibilización.

Al mismo tiempo, las características de estas manifestaciones persistentes o crecientes no permite sostener la idea de un mayor peso trascendencia e influencia socio-política de la movilización y la conflictualidad en estas sociedades. Esta segunda apreciación es más difícil de sostener en tanto es de orden cualitativo, se presenta en negativo, como pérdida de ciertas características, como ausencia, vaciamiento o repliegue.

Por otra parte, la contradicción entre ambas tendencias es, como lo señalábamos, sólo aparente ya que no son excluyentes. La persistencia y el incremento de acciones contenciosas puntuales remite a dinámicas ligadas a procesos estructurales, podríamos decir fisiológicos de sociedades capitalistas: conflictos salariales, demandas de servicios, presiones para obtener derechos o ser objeto de políticas públicas, etc. A nivel interpretativo, circula la idea de que este aumento pudiera relacionarse con la ampliación de derechos o de oportunidades políticas en el contexto favorable a la negociación social generado por los gobiernos progresistas. Al mismo tiempo, la repetición o la intensificación de procesos de esta naturaleza no sólo no garantizan de por sí que la movilización se incremente y se politice –aun cuando también es cierto

² En muchos casos no se tiene este registro comparativo sino apreciaciones de los observadores, así que estamos emitiendo una valoración a partir de una percepción y una aproximación que, salvo algunos casos como Ecuador, Brasil y Venezuela, no cuenta con un respaldo numérico.

que sin cierta efervescencia social esta posibilidad está excluida- sino que también se podría hipotetizar que determinado ejercicio de movilización es necesario y, en la medida en que puede ser contenido y controlado, sirve de válvula de escape, permite cierta gimnasia participativa, que dentro de cauces establecidos, evita la acumulación de tensiones que podrían llevar a fenómenos más explosivo, espontáneos y radicales de movilización y politización.

Si bien no podemos confirmar esta hipótesis, es importante formularla para evitar caer en una asociación mecánica entre la apreciación cuantitativa de la protesta y su valoración cualitativa. Por otra parte, no hay que descartar una acumulación de malestar que, amén de no convertirse en una masiva oposición de izquierda, da cuenta de una inversión de tendencia que, desde el año anterior, llamábamos re-movilización.

Finalmente como última consideración introductoria, es importante señalar que, siempre a nivel cualitativo, que la aparente contradicción entre persistencia del conflicto y desmovilización y despolitización puede explicarse a partir de la existencia de distintos y renovados actores en escena. Así que, desde esta óptica, podríamos sostener que la segunda tendencia es propia de los movimientos y las organizaciones sociales que fueron protagonistas del ciclo previo a la instalación de los gobiernos progresistas mientras que la primera se instala entre nuevos y viejos actores que se posicionan en el contexto actual.

Estas hipótesis de lectura de las tendencias, aunque no hayan sido comprobadas empíricamente, tienen la virtud de captar procesos en curso en vista de tratar de determinar cuáles son los predominantes.

Pasando a un nivel más general de análisis, en las siguientes páginas, trataré de desarrollar la argumentación sobre la articulación de estas tendencias ampliando la interpretación introduciendo tres conceptos gramscianos que, a mi parecer, apuntalan el ejercicio de pensar en clave latinoamericana el lugar de la conflictualidad en los países gobernados por fuerzas progresistas y, de esta manera, nos acercan a una visión de época.

Sin la pretensión de agotar aquí un ejercicio que requeriría un desarrollo extenso y minucioso para evitar el riesgo de encasillar teóricamente a realidades históricas rebosantes de especificidades, pretendemos dejar abierta en las páginas siguientes una veta de análisis al postular que las experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos de la década pueden ser leídas como *revoluciones pasivas* y, de la mano, a la luz de los conceptos complementarios de *cesarismo progresivo* y *transformismo*.³

En efecto si bien puede resultar imprudente un ejercicio interpretativo que tienda a asimilar procesos distintos como los de los gobiernos encabezados por Lula-Dilma, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez-Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor-Cristina Kirchner, Daniel Ortega, Mauricio Funes, Francisco Lugo y Ollanta Humala –que incluye a la gran mayoría de los países de América del Sur- existen varios argumentos relevantes que apuntan hacia la posibilidad y la necesidad de pensarlos transversalmente para reconocer elementos en común y diferencias. Justamente el debate sobre la actualidad latinoamericana se orientó hacia la caracterización de estos gobiernos como un desafío interpretativo central y existen siempre más ejercicios analíticos e investigaciones que apuntan en esta dirección. Mientras la vertiente más político-ideológica del debate se ha dislocado en torno a algunas posturas que podemos definir típicas: apoyo, apoyo crítico, oposición de derecha, oposición de izquierda⁴, en el terreno analítico el problema teórico mayor parece ser el de sintetizar las contradicciones y las ambigüedades que marcan estas experiencias políticas. En este sentido, los conceptos gramscianos, por su carácter dialéctico, parecen ofrecer una articulación posible al dar cuenta de los contrastes y las tensiones internas a los procesos, sin que esto excluya la posibilidad de una toma de partido o una postura político-ideológica.

³ Para una aproximación más puntual a estos conceptos remito a una versión extensa del ensayo que puede consultarse en el libro compilado por Mabel Thwaites, *El Estado en América Latina* que puede consultar en la página de clacso.edu.ar.

⁴ Cada una de ellas tiene a su interior matices y diferencias. Por ejemplo convergen y difieren las críticas de corte autonomista, marxista-leninista o ambientalistas y las oposiciones de derecha pueden ser más liberales o más conservadoras en temáticas diferentes como las económicas o las sociales y culturales. De la misma manera existen variaciones significativas – y particularmente interesantes y poco analizadas y estudiadas- de apoyo crítico al interior de las coaliciones sociales y partidarias que sostienen a estos gobiernos.

Así que, en este nivel de generalidad, a modo de marco hipotético abierto que evite caer en esquematismos que subordinan la realidad a la teoría, quiero simplemente esbozar algunas ideas preliminares que podemos resumir así:

- i) Las transformaciones ocurridas en la década a partir del impulso de los gobiernos progresistas latinoamericanos pueden ser denominadas *revoluciones* -asumiendo una acepción amplia y centrada exclusivamente en los contenidos mencionada- en tanto promovieron cambios significativos en sentido antineoliberal y posneoliberal que pueden visualizarse en un rango de oscilación, según los casos, entre reformas profundas y substanciales y un “conservadurismo reformista moderado” –usando una expresión de Gramsci. Brasil podría representar un punto de referencia del conservadurismo y Venezuela uno de reformismo fuerte con alcances estructurales.
- ii) Al mismo tiempo, impulsada inicialmente por pero posteriormente a contrapelo de la activación antagonista de movilizaciones populares y en razón de sus limitaciones, la conducción y realización del proceso fue sostenida *desde arriba*, -aun cuando incorporó ciertas demandas formuladas desde abajo. A nivel clasista, desde la altura del gobierno, las fuerzas políticas progresistas reconfiguraron sus alianzas incorporando sectores de las clases dominantes, tanto en términos de intereses y de orientación de las políticas públicas, como por la sobreposición de nuevas capas burocráticas a las anteriores. Por otra parte, en términos de dinámica y de procedimiento político, los cambios y las reformas fueron impulsadas estrictamente *desde arriba*, por medio del *Estado*, el gobierno y, en particular, el poder presidencial, haciendo uso de la institucionalidad y la legalidad como único resorte e instrumento de iniciativa política.
- iii) En particular, las fuerzas políticas instaladas en este peldaño gubernamental promovieron, fomentaron o aprovecharon una *desmovilización* o *pasivización* más o menos pronunciada de los movimientos populares y ejercieron un eficaz control social o, si se quiere, una hegemonía sobre las clases subalternas, que socavó –

parcial pero significativamente- su frágil e incipiente autonomía y su capacidad antagonista, generando o no contrarrestando una re-subalternización funcional a la estabilidad de un nuevo equilibrio político. De allí que el elemento pasivo se volvió característico, sobresaliente, decisivo y común a la configuración, en el reflujo de una politización antagonista a una despolitización subalterna⁵, de los diversos procesos latinoamericanos.

- iv) En el contexto de estas *revoluciones pasivas*, operaron importantes fenómenos de *transformismo* en la medida en que elementos, grupos o sectores enteros de los movimientos populares fueron cooptados y *absorbidos* por fuerzas, alianzas y proyectos conservadores y, en particular, se “mudaron” al terreno de la institucionalidad y de los aparatos estatales para operar o hacer efectivos tanto las políticas públicas orientadas a la redistribución, generalmente de corte asistencialista, como los correspondientes procesos de desmovilización y control social o, eventualmente, de movilización controlada.
- v) La modalidad de *revolución pasiva* latinoamericana abreva de la tradición caudillista y se presenta bajo la forma de *cesarismo progresivo*, en la medida en que el *equilibrio catastrófico* entre neoliberalismo y antineoliberalismo se resolvió a través de una síntesis progresiva (es decir tendencialmente anti y posneoliberal) en torno a una figura carismática como fiel de la balanza es colocado en el centro del proceso. Los gobiernos progresistas giran, en efecto, en torno a la figura de un caudillo popular que garantiza no sólo la proporción entre transformación y conservación sino que, además, viabiliza y asegura su carácter fundamentalmente pasivo y delegativo, aun cuando pueda recurrir esporádicamente a formas de movilización puntuales y contenidas.

Antes de argumentar brevemente estas hipótesis, cabe señalar que esta línea de interpretación no está orientada a desconocer la importancia de las

⁵ Ver: Massimo Modonesi (2010), *Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política*, Prometeo-CLACSO-UBA, Buenos Aires.

transformaciones en curso, ni a descalificar un conjunto de gobiernos –unos más que otros- que están impulsando procesos en buena medida antineoliberales y antimperialistas –que bien pueden reflejarse en la ideas de revolución y de progresismo que aparecen en los conceptos que estamos utilizando- sino de reconocer una dimensión fundamental y en efecto profundamente problemática como es la de la pasividad y, peor aún, de la pasivización y la desmovilización que acompaña y caracteriza estas experiencias.

La idea de *revolución* sugerida en la primera hipótesis alude a un pasaje histórico marcado por el agotamiento y la superación (relativa) del neoliberalismo como paradigma político-económico y como modelo dominante en la mayoría de los países latinoamericanos. El debate en curso sobre antineoliberalismo, posneoliberalismo, neodesarrollismo, anticapitalismo y socialismo del siglo XXI es sintomático de este proceso general aunque las posiciones, lejos de encontrar un consenso, se ramifican no sólo en relación con las posturas político-ideológicas sino en función de los distintos ámbitos y las diferentes experiencias nacionales. Al mismo tiempo, a la hora de evaluar el alcance del cambio de paradigmas no es lo mismo sopesar y valorar el relance o estancamiento del gasto público y social que reconocer la escasa dinamización del sector productivo interno o la re-primarización en clave exportadora, que por lo demás no opera de la misma manera en relación con diversos productos y distintas economías nacionales y es transversal a toda la región, al margen del color y la orientación de los gobiernos.

En relación con la fórmula gramsciana, esta evaluación sobre el alcance de las transformaciones socio-económicas atañe a la dimensión estructural del carácter revolucionario del cambio. Todo sumado, asumiendo en este rubro una postura lo más ecuánime posible, hay que reconocer un giro –aún sea relativo- respecto al neoliberalismo en cuanto a los énfasis nacionalista y social que se reflejan en un conjunto de medidas soberanistas y redistributivas, mientras que en relación con el relance de la producción industrial, la inserción en el mercado mundial y la persistencia e inclusive reforzamiento de un perfil primario-exportador –y los consiguientes costos ambientales- no se observaron

cambio substanciales o dignos de ser apreciados e inclusive hay quienes sostienen la hipótesis de una regresión. Si esto no alcanza para ser posneoliberal, anticapitalista y socialista y si este último umbral es viable en el corto plazo, es un tema que rebasa el ejercicio analítico que quiero desarrollar. Aún en el rango de oscilación entre reformas estructurales y un “conservadorismo reformista moderado”, los procesos en curso no dejan de marcar un giro significativo que lleva más allá del neoliberalismo tal y como fue implementándose en América Latina y que, asumiendo la fórmula gramsciana, podemos definir *revolución* en el sentido acotado y restringido.

Por otra parte, en relación con la segunda hipótesis, hay consenso en reconocer que las transformaciones ocurridas pasan por una iniciativa que surge desde arriba y pone en el centro, como motor de las prácticas reformistas y conservadoras, al aparato y la relación estatal.

Es indiscutible que, con diferente intensidad, los gobiernos progresistas latinoamericanos, a contrapelo del neoliberalismo, volvieron a colocar al Estado -y las políticas públicas que de él emanan- como instrumento central de intervención en lo social y lo económico. Más allá del debate sobre los vicios y/o las virtudes socio-económicas de una apuesta o ilusión neodesarrollista, el estatalismo actualmente en boga en América Latina corresponde al modelo de la *revolución pasiva* en la medida en que combina eficazmente la capacidad de innovación desde arriba con el control hacia abajo. Esto no implica una condena ideológica de principio del papel del Estado al estilo autonomista, sino el simple y llano reconocimiento del papel que está cumpliendo en el contexto de las experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Uno de los cuestionamientos más destacados apunta al uso de las políticas sociales asistencialistas –que responden parcialmente a demandas formuladas desde abajo- a las cuales recurrieron abundantemente todos estos gobiernos y que, por una parte, operan un redistribución de la riqueza –que hay que festejar- mientras, por la otra, no sólo no garantizan a los pobres medios propios y durables para garantizar su bienestar sino que además operan y son operados como poderosos dispositivos clientelares y de construcción de lealtades políticas. Sin embargo, me interesa destacar en la óptica de esta presentación,

más que la evaluación de los logros socio-económicos y el carácter de clase de estos procesos, la constatación de los límites socio-políticos, el desfase entre activación movimientista y pasivización gubernamental, y evidenciar la iniciativa desde arriba, desde viejas y nuevas élites, desde el Estado o la sociedad política y la correspondiente o paralela construcción de la pasividad hacia abajo, de las clases subalternas, organizadas y no.

En este sentido, en un manuscrito publicado *post-mortem* sólo hace un año, José Aricó señalaba claramente las aristas críticas de una vertiente o versión progresista de la *revolución pasiva*:

La revolución pasiva puede ser ejercida a través de las tendencias autoritarias centralizadoras, caso de un estado dictatorial, pero, como dice Gramsci no está separada del consenso, de la hegemonía, que es lo que ocurre fundamentalmente en la Unión Soviética. Es decir, o bien se da una reestructuración social, una modificación de la propiedad social desde arriba a través de la dictadura que opera sobre el conjunto de las clases que la soportan, o bien este proceso puede ser llevado a cabo por una tendencia corporativa, es decir una tendencia socialdemocratizadora que fragmenta el conjunto de las clases, que las divide a través de una política de reforma que impide la conformación de un bloque histórico capaz de reconstruir la sociedad sobre nuevas bases. De este modo, todo proceso de transición que no está dirigido, conformado y regido por el ejercicio pleno de la democracia como elemento decisivo de la conformación de la hegemonía (democracia que significa el proceso de autogobierno de las masas) adquiere el carácter de una revolución pasiva, de un poder de transformación que se ejerce desde la cúspide contra la voluntad de las masas y que, en última instancia acaba siempre por cuestionar la posibilidad concreta de constitución del socialismo⁶.

Se puede aplicar esta caracterización a las experiencias populistas o nacional-populares del pasado como a las que circulan en la actualidad latinoamericana. Al mismo tiempo, para no resucitar aquí el viejo y eterno debate sobre el populismo que produjo no pocas posturas sectarias por parte de la izquierda marxista, insisto en el aspecto decisivo de la pasividad, el contrario del “ejercicio pleno de la democracia” que evoca Aricó, sin el cual no hay revolución en el sentido integral de la palabra: transformaciones objetivas impulsadas y acompañadas por transformaciones subjetivas.

⁶ Aricó (2011), *Nueve lecciones sobre economía y política en el marxismo*, El Colegio de México, México, pp. 273-274.

Es un hecho que los gobiernos progresistas latinoamericanos surgieron *después* de oleadas de movilizaciones populares, con mayor o menor cercanía temporal o relación directa. Entre los gobiernos surgidos directamente de crisis políticas (Argentina, Ecuador y Bolivia) y los que nacieron de procesos relativamente ordinarios centrados en elecciones (Uruguay, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Perú, Paraguay y también, con algunas salvedades, Venezuela⁷). Al mismo tiempo, al margen de la rupturas institucionales provocadas por la irrupción de movimientos populares que se dieron en los primero casos, en todos los demás preexiste cierto ciclo de protestas o de oposición al neoliberalismo más o menos intenso pero siempre significativo e influyente en la medida en que trastocó la correlación de fuerzas como resultará reflejado en los posteriores resultados electorales⁸.

En la primera década del siglo se contaron tantos gobiernos de tinte progresista como no se veían desde los años 30 y 40⁹.

En este terreno, como ya anunciado anteriormente, el problema interpretativo puede plantearse a partir de la hipótesis que señala que la presencia y las acciones de los llamados gobiernos progresistas en América Latina

⁷ Ya que el proceso de desgaste de la partidocracia no se expresó en una ruptura sino en un ciclo de fisuras que arrancó en el caracazo, paso por el intento de golpe y desembocó en la sorpresiva victoria electoral de Chávez en 1998.

⁸ En esta secuencia temporal se juega gran parte del alcance de las distintas interpretaciones en tanto algunos consideran que los gobiernos se legitiman como expresión de los movimientos populares y se orientan a evaluarlos sólo en función de las transformaciones concretas, sociales y económicas promovidas en tanto respuestas a las demandas formuladas en las protestas antineoliberales, mientras que, por el contrario, se sostiene que en el pasaje de unos a otros se produce una traición o simplemente modificación substancial del proceso que desemboca en un fracaso o un perversión ya que, además de limitados o nulos cambios en sentido antineoliberal, el saldo de los gobiernos progresistas es considerado negativo e involutivo en la medida en que promueve una desmovilización que debilita y desarticula las organizaciones populares que se habían forjado o fortalecido en el ciclo de ascenso de las luchas sociales.

⁹ Comparando una época con la otra, encontramos, a grandes rasgos, una interesante similitud en la secuencia ciclo de movilización popular e instalación de gobiernos progresistas en los años 30-40, los cuales operaron como solución de compromiso, como forma de temperar y desactivar el conflicto, abriendo una época de revolución pasiva que resultó bastante exitosa hasta que apareció otro ciclo de movilización y de conflicto que inició entre finales de los años 40 y mediados de los años 50 y terminó en los años 70, con la oleada militarista que arrasó con la diversas expresiones –nacional-populares y socialistas revolucionarias- de movimientos populares construidos y fortalecidos a los largo de por lo menos medio siglo de historia. La hipótesis de una similitud en la composición de estos dos ciclos históricos merecería ser explorada por medio un tratamiento mucho más profundo y sistemático.

aprovechan, propician, promueven una relativa desmovilización y despolitización o, en el mejor de los casos, una movilización y politización controlada y subalterna de los sectores populares y los movimientos y organizaciones sociales. Si en los primeros años, en particular en Venezuela, Ecuador y Bolivia, cuando las derechas buscaron el camino del conflicto social e institucional para desestabilizar a los gobiernos antineoliberales, los índices de conflictualidad se mantuvieron relativamente altos pero, desde que esta ofensiva fue frenada y las oposiciones conservadoras o neoliberales volvieron a jugar sus fichas principalmente a nivel electoral -cuando no se adhirieron pragmáticamente o se articularon felizmente en una alianzas con las fuerzas progresistas gubernamentales esperando que llegue el momento de una revancha o que sea más rentable otra opción política-, la disminución cuantitativa de la conflictualidad social ha sido evidente y así lo registran los analistas y puede constatarse en diversos ejercicios de recopilación cuantitativa, mientras que en los últimos dos-tres años parece haber un repunte hacia una nuevo aumento de episodios de protesta¹⁰.

Al mismo tiempo, el proceso de desmovilización y pasivización, más allá de lo cuantitativo, se refleja en un claro pasaje de una politización antagonista a una subalterna, lo cual permite evitar los rasgos más esquemáticos de la antinomia activo-pasivo. En efecto, si bien existen márgenes de acción y movilización de matriz subalterna estos son cualitativamente distintos de los que surgen de procesos caracterizados por rasgos antagonistas y autónomos. Esta brecha cualitativa permite hablar, aún en presencia de formas subalternas de acción, de resistencia y de protesta, de una tendencia general a la desmovilización y la pasivización que registre en forma combina una relativa, variable y oscilante disminución cuantitativa de acontecimientos pero fundamentalmente la despolitización subalterna que la acompaña y la caracteriza.

Como ya señalábamos el año pasado, la experiencia de los llamados gobiernos progresistas fue, al margen de la evaluación de los saldos en términos de

¹⁰ Debido posiblemente a que un número siempre más creciente de actores y organizaciones populares se alejan de los gobiernos progresistas y asumen que la lucha por las reivindicaciones tiene que darse por medio de la presión y la protesta.

políticas públicas y de un futuro balance histórico, implicó un costo de desmovilización y de despolitización, en la medida en que se dejó pasar la “oportunidad de ensayar o de dejar fluir una democracia participativa basada en la organización, la movilización y la politización como vectores de un proceso de fortalecimiento y empoderamiento de las clases populares.” Por el contrario, las fuerzas políticas encaramadas en los gobiernos no contrarrestaron, aprovecharon o inclusive impulsaron la tendencia al repliegue corporativo-clientelar de gran parte de las organizaciones y los movimientos que habían protagonizado las etapas anteriores. En esta generalización que pone en evidencia la tendencia más gruesa no hay que perder de vista, en el trasfondo del proceso, que existen tres vertientes de movilización en curso en los países que estamos contemplando: las promovidas desde los gobiernos y las instancias partidarias y sindicales que los sostienen; las que son impulsadas por las oposiciones de derecha; las que surgen desde disidencias y oposiciones sociales de izquierda.

Como se señaló, las primeras dos tendieron a disminuir en los años conforme se dieron acuerdos de gobernabilidad (salvo las coyunturas electorales y la rutinaria gimnasia de movilización que le corresponde). La existencia del último tipo, en forma creciente en los últimos años, podría parecer como una confutación de la hipótesis de la pasividad. Al mismo tiempo, al margen de su valoración cualitativa hay que reconocer que no se trata, salvo excepciones y coyunturas (en particular en Bolivia), de fenómenos cuantitativamente masivos y prolongados, o sea ni intensiva ni extensivamente logran invertir la tendencia general que, más bien, confirma la hipótesis de re-subalternización, es decir de reconfiguración de la subalternidad como matriz subjetiva de la dominación, como condición para la revolución pasiva. Al mismo tiempo, en este terreno se juega la posibilidad de relanzar un ciclo de conflicto, de iniciativas desde abajo así que, por escasas o mínimas que sean, las luchas populares a contrapelo de los gobiernos progresistas tienen un enorme valor simbólico, político y estratégico en la medida en que son experiencias que se acumulan y pueden potenciarse dando vida a una nueva etapa marcada por el protagonismo popular.

Por otra parte, en este pasaje en el cual afloran contratendencias significativas en los países latinoamericanos se hace evidente que la hipótesis de caracterización por medio del concepto de revolución pasiva implica desdoblarse distinguiendo de la idea de proyecto y proceso. En este sentido, cabe preguntarse en qué medida el proyecto se está realizando y, asumiendo que no lo está siendo plena sino parcialmente, si es suficiente para determinar el proceso. A nivel provisional asumimos que así es y, por lo tanto, con los matices necesarios, es posible reconocer y analizar algunos rasgos que, por inacabados que sean, permiten trazar el contorno y perfil de la revolución pasiva como modalidad y forma operante en las experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos.

En realidad, el punto más delicado y problemático de la aplicación de estos conceptos es el carácter de clase que atribuye Gramsci en forma tajante e inequívoca a los fenómenos de revolución pasiva. En el caso de las experiencias latinoamericanas que estamos tratando de caracterizar, más que en los ejemplos que utiliza Gramsci, no es posible afirmar tajantemente que los gobiernos progresistas sean expresiones directas de las clases dominantes y de la burguesía así como no podríamos afirmar lo contrario, es decir que surjan estrictamente de las clases subalternas y de los trabajadores. Sin embargo, entre las mediaciones y las contradicciones interclasistas que, con distintos matices y énfasis, aparecen en todos estos casos, se perciben claramente unos alcances progresistas pero también unos límites conservadores al horizonte de transformación y el color ideológico del proyecto y, en estos últimos, se vislumbra un evidente rasgo de clase -en última instancia- al cual evidentemente se refería Gramsci.

Dicho de otra manera, sin llegar a decir que se trate de gobiernos ejercidos directamente o completamente por las clases dominantes, son gobiernos cuya actuación no se contraponen frontalmente y de forma sistemática a los intereses de ellas -algunos diría que son cómplices de ellas- sino que buscan forjar una hegemonía inter o transclasista que rompa la unidad de éstas para promover el desgajamiento de un sector progresista o nacionalista del campo oligárquico

hacia un proyecto reformista conservador que se realice como revolución pasiva.

Por otra parte, no se puede no hacer el recuento de las limitaciones que, desde los movimientos populares permitieron la realización de experiencias de revolución pasiva es decir, para evitar usar otras palabras, las que enlistaba Gramsci: falta de iniciativa popular unitaria y subversivismo esporádico, elemental e inorgánico. Elementos a partir de los cuales se configura la posibilidad de la revolución pasiva y, al mismo tiempo, condiciones actuales para su continuidad y prolongación en el tiempo como puede observarse en los fragmentarios y ocasionales fenómenos de resistencia y oposición desde abajo que aparecen en los países gobernados por fuerzas progresistas.

En efecto, no hay que perder de vista la naturaleza contradictoria e inacabada de los procesos de pasivización de los movimientos populares. Existe una tensión que los atraviesa y, como se hizo evidente en la larga tradición de experiencias populistas, existen convocatorias a la movilización controlada que a veces puede ser rebasadas e incluso desbordarse y, señala Franklyn Ramírez, posiblemente se le trata de “docilizar” justamente por esta tendencia al desborde. Este mismo autor considera que hay que reconocer que, en la fase de institucionalización, aparecen instancias de democracia directa establecidas las tres nuevas constituciones (Venezuela, Ecuador y Bolivia). Se pregunta entonces si no habría que matizar las acusaciones al autoritarismo a los gobiernos progresistas asumiendo que también existe, en particular en estos países, una “apuesta por socavar el peso de las instituciones liberales de la democracia representativa para abrir un mayor dinamismo de la acción colectiva de *los de abajo* en los procesos de control y toma de decisiones públicas” (Franklyn Ramírez, intercambio epistolar, 2013). Creo que esta apuesta existió en el origen de los gobiernos, en las agendas de los movimientos, pero fue diluyéndose en las prácticas de gobierno aunque siga reproduciéndose discursivamente o siga siendo una bandera de algunos sectores o grupos al interior de las coaliciones gobernantes, grupos no suficientemente fuertes o influyentes para determinar el rumbo general.

Más allá de las buenas intenciones de unos cuantos, es cierto que, por lo menos en el caso de Venezuela, el diseño y la práctica de democracia participativa ha sido colocado en un lugar prioritario tanto a nivel simbólico como en el plano del financiamiento público. Pero, esta constatación no impide reconocer que el mecanismo ha sido viciado por lógica clientelares y por la verticalidad emanada del PSUV, lo que nos lleva a preguntarnos si el rumbo del proceso venezolano se define desde abajo, desde la “democracia protagónica”¹¹.

Ahora bien, hay que considerar que el reflujo de los procesos espontáneos de participación ligados a coyunturas no se resuelve mecánicamente agregando y sobreponiendo mecanismos de ingeniería institucional de corte participativo. Al mismo tiempo, toda forma de institucionalización acarrea necesariamente un grado de pasividad y de pasivización, lo cual no quiere decir que es irrelevante la existencia de andamiajes institucionales que contemplan e incluyen instancias participativas, siempre y cuando no se vacíen de contenido, no se vuelvan simples eslabones burocráticos y se conviertan en mecanismos de control social.

Por otro lado, evitando el maniqueísmo propio de la dicotomía institucionalización-autonomía, aparecen las tendencias de fondo a la desconfianza política, a la crisis de las instituciones políticas occidentales, que llevan a plantear la tesis de la pasividad como una tendencia societal¹². Por

¹¹ Véase, al respecto, los artículos de Andrés Antillano, Martha Harnecker y Yanahir Reyes en Miriam Lang y Alejandra Santillana (compiladoras) (2010), *Democracia, participación, socialismo. Bolivia, Ecuador, Venezuela*, Fundación Rosa Luxemburgo, Quito.

¹² Al respecto Franklyn Ramírez sugiere que se deben considerar “las bases sociológicas de la pasivización”, fenómenos que van más allá de los movimientos sociales pero los atraviesan y condicionan la política de los gobiernos progresistas en tanto “No solo ellos no promueven la movilización popular como deberían (aunque si lo hicieran también podrían ser criticados por recortar la autonomía de lo social) sino que aún si lo hicieran los efectos se limitarían, muy probablemente, al campo de los “ya” movilizados. Eso ya sucedió en cierta forma en los años 90 con el propio ejercicio antagónico de los movimientos sociales y su imposibilidad de irradiación política más allá de ciertos circuitos (la tesis de la masividad del anterior ciclo de movilización también debe ser tomada con pinzas). Ahí un límite estructural para la revolución, y ahí el quid del asunto en tiempos actuales”. En este sentido, para Ramírez, el problema central no es la pasivización de los siempre activos sino “la inmovilidad de los que desde

último, hay que señalar que la contradicción entre el momento movimentista y gubernamental encuentra sus raíces en la misma sobreposición de estos momentos a lo largo del proceso.

Dicho de otra manera, como lo mencionamos anteriormente, fueron los propios movimientos populares los que buscan, y en medidas distintas, encontraron los caminos hacia las instituciones bajo una perspectiva de construcción de poder que resultó tendencialmente exitosa.

En cuanto al *transformismo* y al *cesarismo progresivo*, se trata de conceptos que aluden a fenómenos que aparecen tan visibles que resultan obvias las referencias a ellos. Es evidente que la instalación de gobiernos progresistas produjo fenómenos de cooptación desde el aparato estatal que drenaron sectores y grupos importantes e inclusive masivos de dirigentes y militantes de los movimientos y las organizaciones populares. Este acontecimiento es central para explicar la pasivización, subalternización, control social o movilización controlada o heterónoma. De la misma manera, es particularmente notorio como la forma política asumida por estos hechos remite a un formato caudillista y, en los términos que estamos proponiendo, un cesarismo progresivo que cumple una función fundamental en tanto no sólo equilibra y estabiliza el conflicto sino que además afirma y sanciona la verticalidad, la delegación y la pasividad como características centrales y decisivas.

El elemento recurrente, sobresaliente y determinante es entonces la pasividad o, en términos de proceso y de iniciativa heterónoma, la pasivización o subalternización que en palabras más corrientes y en la lógica de la década latinoamericana es más adecuado llamar desmovilización en tanto responde o sucede a un fenómeno de movilización.

siempre (o desde hace mucho) han sido pasivos y subalternizados por formas de coordinación social y comprensión que liquidan la centralidad de la política / de la acción pública estatal / de la acción colectiva y la subordinan al ethos del mercado, de la familia, de las religiones, de la sociabilidad/subjetividad pre-y-anti política" (Franklyn Ramírez, intercambio epistolar, 2013).

Centrando la cuestión en el ámbito de los procesos de subjetivación política, hay que reconocer un reflujo hacia la subalternidad, una pérdida de capacidad antagonista y de márgenes de autonomía de los actores y movimientos sociales que fueron protagonistas de las luchas sociales en América latina a la hora de la activación del ciclo antineoliberal. Como contraparte, se hacen evidentes tendencias a la institucionalización, delegación, desmovilización y despolitización (cuando no al autoritarismo, burocratización, clientelismo, cooptación y represión selectiva) que caracterizan los escenarios políticos dominados por la presencia de gobiernos progresistas. Afloran las “perversiones” de proyectos de transformación que, al margen de las declaraciones de intención, están despreciando, negando o limitando la emergencia y el florecimiento de la subjetividad política de las clases subalternas, centrándose en iniciativas y dinámicas desde arriba que lejos de promover procesos democráticos emancipatorios, reproducen la subalternidad como condición de existencia de la dominación.

Al margen de la valoración de los saldos y los alcances socio-económicos de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos progresistas, aparecen las miserias de formas históricas de estatalismo y de partidismo que lejos de operar como dispositivos de democratización real y de socialización de la política se convierten en obstáculos y en instrumentos de revolución pasiva. Al aprovechar, controlar, limitar y, en el fondo, obstaculizar cualquier despliegue de participación, de conquista de espacios de ejercicio de autodeterminación, de conformación de poder popular o de contrapoderes desde abajo –u otras denominaciones que se prefieran- se estaría no sólo negando un elemento substancial de cualquier hipótesis emancipatoria sino además debilitando la posible continuidad de iniciativas de reformas –ni hablar de una radicalización en clave revolucionaria- en la medida en que se desperfilaría o sencillamente desaparecería de la escena un recurso político fundamental para la historia de las clases subalternas: la iniciativa desde abajo, la capacidad de organización, de movilización y de lucha.